


REPÚBLICA DE COLOMBIA			
 JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO SOACHA – CUNDINAMARCA			
Tipo de Proceso		Acción de Tutela	
Radicación del Proceso Juzgado de Origen 202100092		257544003001	
Radicación del Proceso 202120099		257543103002	
Accionante	Aida Milena Alarcón Sarmiento		
Accionado	Conjunto Residencial San Carlos - Propiedad Horizontal		
Vinculado	Consejo de Administración del Conjunto Residencial San Carlos		
Derecho	Petición	Decisión	Confirma
Soacha, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)			

Asunto a tratar

Procede el Despacho a resolver la impugnación del fallo de Tutela proferido el día dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por el **Juzgado Primero (01) Civil Municipal de Soacha - Cundinamarca**, el cual negó por improcedente la acción de tutela incoada. <https://bit.ly/3pU1Btc>

Solicitud de Amparo

La señora **Aida Milena Alarcón Sarmiento**, interpuso acción de tutela, de conformidad con los hechos descritos; en donde solicita el amparo del derecho fundamental a la petición. <https://bit.ly/3DWA6nN>

Trámite

El Juzgado Primero (01) Civil Municipal de Soacha - Cundinamarca admitió la acción de tutela el día tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), proveído en cual ordenó vincular al **Consejo de Administración del Conjunto Residencial San Carlos P.H.** y ordenó notificar a las partes, para que ejercieran su derecho de defensa.

El fallador de primera instancia estudió el derecho amenazado, y de acuerdo al principio de informalidad el cual le corresponde al juez identificar y proteger, negó por improcedente el derecho invocado por la accionante.

Por lo que en su oportunidad la accionante **Aida Milena Alarcón Sarmiento**, impugnó el fallo proferido por el Juez de primera instancia.

Habiendo correspondido por reparto a este Juzgado, se admite la impugnación al fallo aludido, mediante auto calendado el día veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Impugnación

En el expediente digital obra escrito de impugnación, donde **Aida Milena Alarcón Sarmiento** plantea su inconformidad. <https://bit.ly/33zdihx>

Fundamentos de la decisión

Problema Jurídico

Asunto	Acción de Tutela
Radicación del Proceso	257543103002 202120099
Soacha, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)	

En este asunto corresponde al Despacho resolver, si lo decidido por el Juez de primera instancia corresponde a un actuar legítimo del fallador, qué en últimas se concretó, en si resulta transgredido el derecho de petición de la tutelante **Aida Milena Alarcón Sarmiento**, por el **Conjunto Residencial San Carlos P.H.**, pues considera el accionante que las petición elevada el día veinte (20) de septiembre de la presente anualidad ante la administración del conjunto residencial no fue resuelta de fondo, ni de manera clara, ni precisa, ni congruente, vulnerando de esta manera sus garantías constitucionales.

Competencia

Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública e incluso de particulares.

La acción de tutela constituye un mecanismo encaminado a la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública e incluso en algunos casos por los particulares.

Desde el plano del propio funcionamiento estatal, también es posible identificar un cambio a partir de la Constitución de 1991, porque los fines que se predicán de nuestra organización política, los principios que se defienden en la Carta de Derechos y la estructura que se construye tras la idea de la función pública, exige la participación de todos los servidores públicos –sin importar cuál sea el contenido material de sus actos- y una aplicación de las normas vigentes que son tomadas como el inicio de la tarea de protección y garantía de los derechos.

Contenido de la Decisión

De acuerdo con los argumentos planteados por el impugnante, el análisis que esta Juzgadora, debe realizar es sí el fallo del a quo en efecto es acertado. Para tales efectos, se procede al análisis del caso en concreto. Y en aras de dar respuesta al problema jurídico planteado de acuerdo con los diferentes documentales arrimadas al plenario.

Caso Concreto

De las diferentes pruebas recaudadas en el plenario se interpreta que la inconformidad del accionante radica, en que, la juez en primera instancia incurrió en un yerro al no analizar de fondo las respuestas brindadas por el Conjunto Residencial, sin vislumbrar que las respuestas son ambiguas y/o dilatorias para no responder lo que correspondía, a voces de la accionante, no hay carencia de objeto como lo determino el proveído opugnado, pues no se

Asunto	Acción de Tutela
Radicación del Proceso	257543103002 202120099
Soacha, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)	

dio solución a las pretensiones solicitadas, vulnerando de esta manera sus garantías constitucionales.

Por lo que se refiere al derecho de petición, la Honorable Corte Constitución ha establecido en repetidas oportunidades que la acción de tutela resulta procedente en relación con este derecho fundamental, así:

“En cuanto a este punto, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en afirmar que la tutela es un mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por medio del mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales. De igual manera, se ha sostenido que al tener el derecho de petición aplicación inmediata, el amparo constitucional es un mecanismo principal para su protección. Dijo la Corte en una ocasión: “(d)ado que la señora Rueda Villalba expone en su escrito de tutela la posible afectación de su derecho fundamental de petición, la acción de tutela sería procedente de manera directa en tanto se refiere a un derecho fundamental de aplicación inmediata, situación que se verifica en abundante jurisprudencia de esta Corporación”. (Sentencia T- 084 - 15 , 2015)

En otra oportunidad, el Alto Tribunal constitucional determino que el derecho de petición es un derecho de tipo instrumental, en tanto que es uno de los mecanismos de participación más importantes para la ciudadanía, siendo este una manera de exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes. A causa de lo anterior considera este Despacho judicial, pertinente y útil citar la Sentencia T - 206 -18, en la cual se desarrolla la finalidad que tiene el derecho de petición:

“El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado la Corte que “(...) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.

El primer elemento, busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y los particulares en los casos establecidos por la ley, sin que se puedan abstener de recibirlas y por lo tanto de tramitarlas. Al respecto, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “los obligados a cumplir con este derecho tienen el deber de recibir toda clase de petición, puesto que esa posibilidad hace parte del núcleo esencial del derecho”.

El segundo elemento implica que las autoridades públicas y los particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; en otras palabras, implica resolver materialmente la petición. La jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo deber ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”. En esa dirección, este Tribunal ha sostenido “que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva”

El tercer elemento se refiere a dos supuestos. En primer lugar, (i) a la oportuna resolución de la petición que implica dar respuesta dentro del término legal establecido para ello. Al respecto, la Ley 1755 de 2015 en el artículo 14 fijó el lapso para resolver las distintas modalidades de peticiones. De dicha norma se desprende que el término general para resolver solicitudes respetuosas es de 15 días

Asunto	Acción de Tutela
Radicación del Proceso	257543103002 202120099
Soacha, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)	

hábil, contados desde la recepción de la solicitud. La ausencia de respuesta en dicho lapso vulnera el derecho de petición. En segundo lugar, al deber de notificar que implica la obligación del emisor de la respuesta de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo, con el fin que la conozca y que pueda interponer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé o incluso demandar ante la jurisdicción competente. Se ha considerado que la ausencia de comunicación de la respuesta implica la ineficacia del derecho. En ese sentido, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “[e]l ciudadano debe conocer la decisión proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de petición, porque ese conocimiento, dado el caso, es presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente” y, en esa dirección, “[l]a notificación es la vía adecuada para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. (Sentencia T - 206 - 18, 2018)

Conforme a lo anterior, y de acuerdo a la documental adosada en primera instancia, encuentra este Despacho judicial, que la Unidad Residencial accionada **Conjunto Residencial San Carlos P.H.**, dio respuesta a la petición elevada por la accionante **Aida Milena Alarcón Sarmiento** los días trece (13) de octubre y cinco (05) de noviembre de la presente anualidad.

De lo expuesto, desde ya debe decirse que se confirmará el fallo opugnado pues es claro que la unidad residencial accionada, no ha vulnerado ningún derecho fundamental; por ende, los hechos que dieron origen a la acción constitucional han sido superados por la **Conjunto Residencial San Carlos P.H.**, al dar respuesta de fondo a la petición elevada, y a voces de la H. Corte Constitucional la entidad accionada atendió a lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva. Aunado a que en reiterada jurisprudencia se ha sostenido, que la acción de tutela por su carácter residual, no puede constituirse en un mecanismo alterno o que sustituya otros medios de defensa ordinarios.

A lo anterior, considera esta Jueza Constitucional que se está ante el fenómeno de carencia actual de objeto, por hecho superado, por lo que la Corte Constitucional manifestó en la Sentencia T 038 - 2019 que:

“La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendría algún efecto o simplemente “caería en el vacío”. Específicamente, esta figura se materializa a través en las siguientes circunstancias:

Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.” (Sentencia T-038/19, 2019)

Por otra parte, este Despacho Constitucional, considera pertinente citar a la H. Corte Constitucional, frente a la procedencia de la acción de tutela en contra de la administración de conjunto residencial, es así la Sentencia T - 062 -18, indica que:

Con respecto a la subsidiariedad, esta Corporación ha desarrollado el precedente que admite la acción de tutela como mecanismo principal de protección frente a las controversias originadas en las decisiones o actuaciones de los conjuntos residenciales, cuando de por medio se encuentre el amparo de derechos fundamentales. Sin embargo, dicha procedencia cuenta con excepciones (i) cuando se evidencia que se acude a la acción de tutela como medio para eludir el cumplimiento de los deberes u obligaciones

Asunto	Acción de Tutela
Radicación del Proceso	257543103002 202120099
Soacha, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)	

de la copropiedad; (ii) cuando se trata de controversias de orden económico; (iii) cuando se discute la modificación de bienes de uso común o la utilización general del edificio; y (iv) cuando la acción versa sobre controversias de rango legal.

Dentro de este escenario se presentan distintos mecanismos de solución de conflictos a los cuales pueden acudir los copropietarios y la administración del conjunto residencial, como se destaca en el artículo 58 de la Ley 675 de 2001, el cual dispone que:

“Para la solución de los conflictos que se presenten entre los propietarios o tenedores del edificio o conjunto, o entre ellos y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación o interpretación de esta ley y del reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales, se podrá acudir a:

1. Comité de Convivencia. Cuando se presente una controversia que pueda surgir con ocasión de la vida en edificios de uso residencial, su solución se podrá intentar mediante la intervención de un comité de convivencia elegido de conformidad con lo indicado en la presente ley, el cual intentará presentar fórmulas de arreglo, orientadas a dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. Las consideraciones de este comité se consignarán en un acta, suscrita por las partes y por los miembros del comité y la participación en él será ad honorem.

2. Mecanismos alternos de solución de conflictos. Las partes podrán acudir, para la solución de conflictos, a los mecanismos alternos, de acuerdo con lo establecido en las normas legales que regulan la materia. (...)”

Adicionalmente, el artículo 390 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso” consagra el proceso verbal sumario como mecanismo para el trámite de controversias sobre propiedad horizontal de que tratan los artículos 18 y 58 de la Ley 675 de 2001, previamente señalada. En el primero se regulan las obligaciones de los propietarios respecto de los bienes de dominio particular o privado; mientras que, en el segundo, se alude a la fórmula genérica de conflictos suscitados con ocasión de la interpretación y aplicación de la citada ley o del reglamento de copropiedad. (Sentencia T - 062/2018 , 2018)

De conformidad con lo indicado en la citada jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional, si bien es cierto, la acción de tutela es un mecanismo principal para la protección de garantías constitucionales que sea vean afectadas por las controversias originadas en las decisiones o actuaciones de los conjuntos residenciales, también lo es que los copropietarios dentro de la propiedad horizontal cuentan con otros medios de defensa para sus derechos. A lo anterior, encuentra este Despacho Constitucional, que la decisión proferida por el a quo, esta acorde al ordenamiento jurídico y los establecido por la H. Corte Constitucional en la sentencia que antecede.

Frente a la solicitud realizada por la tutelante **Aida Milena Alarcón Sarmiento**, de medida provisional en su escrito de impugnación, de conformidad a lo normado en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, se **Niega la Medida Provisional**, teniendo en cuenta que no se aportó prueba de amenaza y vulneración de los derechos fundamentales invocados, que requieran de manera urgente la suspensión provisional invocada.

Siendo estos los argumentos para que este Despacho constitucional **Confirme** íntegramente la decisión adoptada por el a quo.

Asunto	Acción de Tutela
Radicación del Proceso	257543103002 202120099
Soacha, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)	

En mérito de lo expuesto el juez de tutela en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución y la Ley.

Resuelve

Primero: Confirma el fallo proferido el día dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por el **Juzgado Primero (01) Civil Municipal de Soacha - Cundinamarca**, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notifíquese de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

Tercero: Cumplido lo anterior, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase



Paula Andrea Giraldo Hernández
Juez



atura

República de Colombia
Juzgado Segundo Civil del Circuito - Soacha Cundinamarca

Firmado Por:

Paula Andrea Giraldo Hernandez
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 002
Soacha - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **036885b04db2843b8bd05b9b7cb50de361874901aa5bdf2e035e05c8daa6dc4c**

Documento generado en 16/12/2021 10:21:49 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>